

DEBATE

Nº 39
SUPLEMENTO
POLÍTICO
Domingo 19
de mayo de 2024



CAMBIO CLIMÁTICO

Tragedia climática en Brasil, inocentes vs. culpables

Para algunos, la magnitud de la catástrofe es, en sí misma, una expresión de un resultado político.

Ahora
EL PUEBLO

DIRECTOR
Carlos Eduardo
Medina Vargas

COLABORADOR
Paulo Cuiza

**DISEÑO Y
DIAGRAMACIÓN**
Gabriel Omar
Mamani Condo

CORRECCIÓN
José María
Paredes Ruiz
Karen Keyla
Nina Pino

Redes Sociales


www.ahoraelpueblo.bo

La Paz-Bolivia
Calle Potosí, esquina
Ayacucho N° 1220.
Zona central, La Paz.
Teléfono: 2159313.

Los conceptos planteados en los artículos publicados en **Debate** no reflejan necesariamente la línea editorial de **Ahora El Pueblo**. Consideramos importante, sin embargo, que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral sobre un tema en particular.

DEBATE

A propósito de la cuasi-renuncia de Pedro Sánchez: las *fake news* como asunto de Estado

PEDRO SANTANDER

TELESUR

En apenas un minuto, Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España, convirtió el asunto de la desinformación y las *fake news* en un asunto de Estado.

Ocurrió a fines de abril cuando sorprendentemente publicó en su cuenta de X una breve carta en la que anunciaba que “Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor.” (<https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1783181535337734409>).

¿La razón de su desazón? Se acababa de enterar de que su esposa, Begoña Gómez, podría ser investigada por la justicia española luego que una organización llamada Manos Limpias presentara una acusación contra ella, basada sólo y exclusivamente en informaciones publicadas en medios digitales de dudosa reputación. Nada de pruebas objetivas, nada de testigos, nada de documentos o confesiones, sólo recortes de prensa para llevar ante la justicia a la esposa del Jefe de Estado.

Finalmente y después de cinco días en que tuvo a todo el país en vilo, anunció que “he decidido seguir, con más fuerza”, y agregó que “nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva, que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo permitiendo que el fango colonice la vida pública”.

“Fango”: así calificó Sánchez a la desinformación y las *fake news* que ciertos medios publican sistemáticamente. “Pseudomedios”: así caracterizó el Presidente a estos medios digitales que en el marco de lo que describió como una “sistemática estrategia de acoso y derribo del adversario” ponen la democracia en peligro. “Maquinaria del fango”: así definió el mandatario la estrecha alianza entre estos pseudomedios y la derecha política del país.

Es quizá ésta una de las observaciones más significativas de sus reflexiones. La desinformación, las *fake news*, los pseudomedios no actúan en el vacío ni a solas, por el contrario, lo hacen en estrecha alianza con algunas fuerzas políticas establecidas del sistema institucional de partidos. Esa “galaxia digital ultraderechista” que

hace “un uso espurio de las redes sociales, está financiada por la ultraderecha”, sostuvo Sánchez sin ambages en su primera entrevista televisiva.

Retrató, además muy lúcidamente la dinámica de operar de esta coalición que constituye la maquinaria del fango: primero un “pseudomedio digital” realiza una denuncia que carece de evidencia; esta (des)información es viralizada en las redes sociales como noticia cierta; una vez que alcanza visibilidad en la esfera digital, a menudo gracias a la amplificación algorítmica impulsada por bots, algún político con cargo en la institucionalidad democrática la recoge y realiza ante los medios tradicionales una denuncia pública advirtiendo acerca de la gravedad de esa (des)información. En ese momento, y gracias a la intervención de ese (usualmente) diputado o senador, la *fake* abandona la galaxia digital, entra al mundo offline y de ahí queda en posición de pase gol para entrar a tribunales.

En el marco de esa dinámica político-comunicacional de las *fake news* es que Sánchez no duda en señalar que “uno de los desafíos más importantes que tiene hoy la democracia contemporánea son los bulos y desinformación”.

Si bien en Chile la desinformación (aún) no ha hecho tambalear a un Presidente, como sí ocurrió en España en estos días, nuestro panorama desinformativo no es muy distinto. Acabamos de ser testigos, por ejemplo, de cómo

diputados de derecha difundieron imágenes de la ministra Camila Vallejos —blanco predilecto de *fakes*— que tenían más de dos años de antigüedad como si fueran recientes, para criticarla por su actitud festiva mientras el país estaba de luto nacional. O cómo el senador Manuel José Ossandón citó un falso tweet del Ministro Nicolás Grau sobre el perro Matapacos. La dinámica acá es la misma de España, que, a su vez, es la misma de Argentina, Colombia, Estados Unidos, del Reino Unido, etc. (<https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2023/10/16/usuarios-de-redes-sociales-de-derecha-son-los-que-mas-consumen-noticias-falsas-lo-dice-la-ciencia/>).

Es una maquinaria del fango que tiene sus periodos de latencia y que, sin ninguna duda, se activará con fuerza y hará mucho daño en las próximas campañas electorales que viviremos como país.

Mientras tanto, todas las iniciativas para regular esta realidad que, como dice Pedro Sánchez, “no va a parar”, duermen en el Congreso.





OCIEL ALÍ LÓPEZ

RT

Con el bloqueo a la reforma de la Ley de Salud el año pasado, el gobierno del presidente Gustavo Petro se notó debilitado. Las élites políticas y económicas, congregadas en el antipetrismo, que reúnen a diversos partidos de derecha y centroderecha, visualizaron al actual proyecto de transformación como un proceso que ya estaba expirando, que estaba boqueando. Petro había puesto toda la carne en el asador legislativo y la mencionada ley se consideraba “el gran lomito”, que al quedar “crudo” iba a terminar congelando todo el espíritu de cambio social y, por ende, a paralizar todas las reformas de ley que las fuerzas progresistas están impulsando en el Congreso nacional.

Sin embargo, los últimos días han ocurrido algunos acontecimientos que indican que el proyecto de Petro está vivo y sigue luchando por modificar las estructuras de dominación existentes. Lo primero, y lo más importante, es que el 23 de abril el Senado aprobó la reforma pensional, uno de los emblemáticos objetivos desde el comienzo de su gestión.

Además, el protagonismo que alcanzó Petro en las marchas del 1 de mayo y el alto grado de movilización política que lograron las fuerzas progresistas en todo el país permitieron posicionarse no solo como un líder que ha revertido el declive legislativo y ha logrado un triunfo importante para su administración, sino también uno que está asumiendo su papel de líder de masas y de calle.

Este líder interpelador y convocante es el que se ha hecho presente desde la noche de este miércoles, cuando se cocinaba un nuevo intento de derrocamiento presidencial, por parte, ahora, de magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Desde la salida en febrero del exfiscal Francisco Barbosa, asociado con el gobierno uribista y enemigo público del presidente, la retórica de la derecha dejó de ser agónica, o terminal. No planteaba, como sí lo hizo en varias escaramuzas desde la posesión de Petro, una finalización abrupta del Gobierno o una exigencia de renuncia presidencial. La derecha que pide una salida ‘fast track’ de Petro habría preferido las últimas semanas verlo consumarse en la arena movediza institucional.

Pero una vez que Petro gana la batalla de la reforma pensional y produce una movilización interpeladora el día del trabajador, activa nuevamente a las células latentes de los sectores más conservadores del país, no solo del uribismo sino de una nueva derecha que se viene configurando desde el triunfo de Petro: el antipetrismo.

EL ESCÁNDALO UNGRD: UNA LECTURA INSURRECCIONAL

Entonces surgió un nuevo escándalo de corrupción circunscrito a la región de la Guajira y en concreto a una dependencia del Estado, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha dejado a varios funcionarios destituidos e investigados, y que a pesar de que el caso irrumpió en una dependencia media, ha disparado

Petro prende las alarmas ante la agresiva avanzada opositora

las amenazas contra la permanencia de Petro y la voluntad popular que le llevó a la presidencia.

Las matrices opositoras no han demandado la investigación o judicialización de los funcionarios implicados en el escándalo, sino que automáticamente consideran que es suficiente motivo para detener las reformas en el Congreso. Se trata de cerrar, otra vez, el escenario legislativo como espacio de implementación de políticas progresistas que se reabrió a partir de la ley de la aprobación de la reforma pensional, y cerrarlo de manera definitiva.

Pero la cosa no quedó allí: la respuesta del conservadurismo ha ido a más las últimas horas.

EL CNE SE SUMA A LA CAMPAÑA ANTI-PETRO

Este miércoles, los magistrados del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz y Álvaro Prada radicaron una ponencia de imputación y formulación de cargos en contra del presidente Gustavo Petro.

El aparataje mediático comenzó a operar para poner otra vez sobre el tapete la posibilidad de destitución del presidente, ‘fast track’, esta vez no desde la institución de la Fiscalía como ocurrió hasta febrero, sino desde el propio ente comicial, lo que es algo inédito puesto que ninguna institución electoral goza de esa potestad.

Pero Petro tampoco se dejó intimidar y comenzó su operación de blindaje con mensajes como éste, donde la ponencia de los magistrados se cataloga de “golpe de Estado” y se interpela al pueblo a defender el Gobierno.

“Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia. A los colombianos progresistas en el exterior iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”.

Así las cosas, la breve pasividad que tuvieron las fuerzas conservadoras durante los últimos meses ha sido sustituida por una nueva y agresiva avanzada institucional contra Petro, lo que genera crispación en la nación neogranadina, que aunque considera que lo peor de la guerra civil y los enfrentamientos violentos ha sido superado, también sabe que las fuerzas antidemocráticas, tanto desde los territorios como desde dentro del Estado, pueden hacer regresar al país a ese cruento escenario.

La siquiera posibilidad de una destitución presidencial abre las puertas a un panorama descontrolado en una nación regada por la pólvora y el fuego.

Esperemos que no ocurra y que todos los actores se mantengan en la línea constitucional y respeten la decisión popular de tener al economista como primer mandatario. Solo así Colombia se procurará una vía que le ha sido ajena.

En Rio Grande do S señalados ante la au

JANAÍNA RUVIARO DA SILVA

LATINOAMÉRICA 21

La tragedia climática que azota el estado de Rio Grande do Sul abrió el escenario para la lucha por identificar (o no) a los culpables de la tragedia. Sin embargo, me interesa saber si hay personas inocentes en esta historia. Además, la magnitud de la catástrofe ha sido objeto de interrogantes sobre si ese es el momento adecuado para la politización. El hecho es que no hay consenso porque los individuos de diferentes grupos y estratos sociales tienen supuestos incompatibles sobre la política y lo que es político. Para algunos, la magnitud de la catástrofe es, en sí misma, una expresión de un resultado político. Para otros, la política es sólo un espectro partidista y, en este momento, no hay bandos. Ni izquierda ni derecha.

Suposiciones irreconciliables son evidentes hasta en el uso de las redes sociales para difundir la idea de que “no se deben donar al gobierno”. Por un lado, los defensores del Estado mínimo y de la iniciativa privada, confiados en prescindir del poder público, utilizan el término gobierno como sinónimo de Estado. De esta manera, infieren la inutilidad del Estado a partir de la ineficiencia del gobierno: “Es el pueblo para el pueblo”, dice el eslogan. Del otro lado, los defensores de un Estado fuerte, activo y proactivo también en la agenda climática. Los últimos diferencian gobierno de Estado y cuando afirman que el gobierno

actual es ineficiente y poco transparente en el manejo de los recursos, también aluden: “Es el pueblo para el pueblo”. El eslogan es el mismo, las premisas son diferentes.

La noción de que “era el deber del gobierno proteger al pueblo y ahora es el pueblo quien lo hace” es asumida tanto por los defensores del Estado mínimo como por los defensores del Estado robusto. Los primeros utilizan esta noción para justificar la falta de importancia de los gobiernos en general. Los defensores del Estado fuerte afirman que los gobiernos actuales (en el estado y en la capital, Porto Alegre) han desmantelado las políticas de prevención de desastres naturales, dejando su regulación en manos del sector privado.

Está claro que la política está en todas partes. Programas, proyectos y acciones concretas para preservar el medioambiente y hacer los espacios habitados más sostenibles y resilientes al cambio climático también conforman la política. Los fenómenos naturales extremos siempre han existido, es cierto, pero es innegable el aumento de su frecuencia e intensidad debido a la acción humana desenfrenada y desordenada en la naturaleza. No importa si se considera que en el epicentro de la desgracia no es momento de señalar culpados. No importa si consideras que ahora es el momento de señalar culpados. ¿Alguna vez te has preguntado si hay personas inocentes en esta historia?

Como señalan los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la catástrofe climática no puede considerarse obra del azar, sino el resultado de décadas de destrucción de recursos na-



climático

Sul, los culpables son la ausencia de inocentes



// FOTOS: AGENCIAS

turales. Construimos en las orillas de los ríos, llenamos de sedimentos sus lechos; acortamos caminos artificialmente; eliminamos la curva del curso de agua y alteramos su velocidad natural en la insaciable carrera por el beneficio y la productividad que acompaña el ritmo despiadado de nuestra vida cotidiana.

El cambio climático debido al calentamiento global no es nada nuevo. Se sabe que el calentamiento global es causado no sólo por las grandes industrias o la negligencia de los gobiernos, sino impulsado por nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, una dieta equilibrada, basada en frutas y verduras y un consumo reducido de proteína animal es beneficiosa no sólo para la salud física sino también para el medioambiente, además de reducir los gases de efecto invernadero, ahorraríamos mucha agua.

Ante esto, independientemente de su postura sobre si es o no el momento de señalar a los culpables, ¿alguna vez ha pensado que tampoco hay inocentes? Incluso si uno se niega a hablar de política en medio de la tragedia, eso subyace en los discursos y posiciones. La política no necesita ser explícita en el discurso para estar presente. La política impregna cada decisión tomada en el presente y en el pasado. No olvidemos las decisiones pasadas. Es innegable que apoyar a los gestores que flexibilizaron la legislación ambiental al permitir un retroceso de 40 años tiene impactos devastadores generalizados. Esto es lo que estamos experimentando. Pero más allá de los gestores y la legislación, ¿cómo con-

tribuyen nuestros hábitos de consumo a un entorno más sostenible?

¿Sabemos reciclar las cápsulas de café o no nos importa su destino? ¿Sabemos caminar o no damos un paso sin el coche que contamina el aire y calienta el planeta? ¿Usamos el mismo par de jeans durante años o los descartamos cada temporada? ¿Ahorramos agua al lavar o cambiamos la ropa como si fuera desechable? ¿Tenemos una dieta vegetariana o consumimos carne todos los días? Hoy se habla mucho de escasez de agua en Rio Grande do Sul, pero ignoramos que por cada kilo de carne producida se necesita un promedio de 15 mil litros de agua. Ignoramos que por cada par de jeans producidos se desperdician más de 5.190 litros de agua, la misma agua potable que escasea en tiempos de catástrofe.

Si hay gente inocente en esta historia, tal vez sólo sean los científicos, como se hace eco categóricamente Chico César: “Hasta hoy nunca ha habido un desarrollo tan destructivista. Eso dice el que no se oye, el científico, esa voz, la de la ciencia. Tampoco les conmueve la voz de la conciencia. Sólo escuchas algo por conveniencia”.

Aunque no se admita, la política está en lo que comemos, en lo que vestimos, en la forma en que nos movemos. La política radica en la forma selectiva en que nos preocupamos por el agua y otros recursos naturales. La política reside en nuestro consumismo insaciable. De hecho, lo que consumimos nos consume a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta porque no es momento de señalar a los culpables. Nadie quiere que les apunten con el dedo.

La oposición en Venezuela **vuelve al carril electoral:** ¿es la normalización definitiva?

OCIEL ALÍ LÓPEZ

RT

Cada vez hay más elementos, acontecimientos y hechos que plantean una regularización de la situación política en Venezuela.

El país caribeño ha vivido una crisis política y económica los últimos años, con hiperinflación y descontrol financiero. Todo catalizado por unas rotundas sanciones por parte de EEUU y la Unión Europea (UE), a quienes no les han importado las afectaciones que el pueblo venezolano ha llevado sobre sus espaldas.

Todo esto acompañado por un proceso insurreccional de la oposición, dirigida por una derecha radical que durante largos años ha realizado golpes de Estado, llamados de intervención extranjera, conformación de un gobierno paralelo y manifestaciones violentas.

Como respuesta, el Estado implementó una política de inhabilitaciones a líderes opositores y de intervención de partidos políticos que participaron activamente en dichos eventos. En medio de esto, la esfera política lucía trabada.

Pero la situación actual parece que comienza a ser otra y que el marco de conflicto agónico va cediendo espacio al de la cabal pugna electoral. Sin embargo, no podemos predecir si se trata de una situación permanente o más bien un simulacro pasajero.

REGULARIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

La oposición, congregada en la Plataforma Unitaria (PU) —que reúne casi una decena de partidos—, ha dado pasos concretos hacia su regularización democrática: ha aceptado las reglas del juego de la institucionalidad venezolana y ha decidido asistir al evento electoral que tendrá lugar el 28 de julio.

En 2018, y en otros procesos comiciales posteriores, la oposición convocó al desconocimiento del resultado electoral, aduciendo que hasta que no hubiera un “cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres” (el mantra tan de moda como inservible de 2019), no procedería a participar, considerando ilegítima la autoridad de los representantes de los poderes públicos y convocando la “desobediencia civil” contra todos los órganos del Estado.

En este 2024, cuando se prepara un nuevo evento electoral bajo condiciones muy similares a las anteriores, todos los actores de oposición, sin excepciones, han decidido acatar las reglas de juego institucionales y han vuelto al camino electoral, inscribiendo a Edmundo González como candidato presidencial. Aunque no han explicado por qué participar en unos comicios cuyas condiciones anteriormente consideraban ventajistas, lo cierto es que todos los partidos y líderes opositores, incluso los más radicales que pedían una intervención militar por parte de EEUU, hoy en día han preferido pedir el voto de pueblo en pueblo.

A diferencia de lo que la oposición solía denunciar, las instituciones estatales han permitido la inscripción de dicho candidato, quien se encuentra haciendo campaña y asistiendo a entrevistas de los principales canales de TV.





Líderes de diversas toldas opositoras, tanto de la PU como del resto de partidos que no pertenecen a ella –en total hay 10 candidatos–, así como el candidato oficial, el presidente Nicolás Maduro, y también dirigentes chavistas, todos están en la calle y en diversos pueblos de la geografía nacional realizando concentraciones y marchas a favor de sus opciones electorales sin incidentes que lamentar.

Nuevamente, después de varios años, se respira un clima de paz en lo que a política se refiere y el pueblo se prepara para dirimir sus conflictos en la arena electoral.

Este proceso de regularización de la oposición, si bien ha contado con sobresaltos y muchas tensiones retóricas en torno a sucedidas mesas de negociación que se realizaron en el extranjero (Barbados, México y Catar), está ocurriendo –a diferencia de otras experiencias del continente como Centroamérica y Colombia– en medio de un proceso pacífico, sobre todo porque los planes de intervención y golpe militar que se activaron desde que el expresidente Donald Trump asumió la silla en la Casa Blanca no prosperaron.

Aunque estamos en un evento competitivo, en tanto todos los actores políticos poseen un candidato y están participando de manera abierta, habría que apuntar que sobre el presidente y candidato Nicolás Maduro pesa una orden de captura por parte de Washington, cuya perpetuación podría enrarecer y poner en peligro el ambiente electoral.

Junto a Maduro, más de una decena de líderes y funcionarios se encuentran solicitados y sancionados por Washington, así como las más importantes áreas de la economía venezolana, que llevan ya más de un lustro de bloqueos y persecución.

Washington y Bruselas han hecho algunos gestos, pero desde Caracas se definen como insuficientes. Este lunes, la Unión Europea suspendió las sanciones que se ciñen sobre algunas autoridades del ente electoral, incluyendo su presidente, Elvis Amoroso. Pero, en respuesta, la Asamblea Nacional condenó el anuncio europeo de reiterar el resto de sanciones, y pidieron al CNE que retire la invitación hecha a la Unión Europea para que participe como veedor durante el evento electoral.

Por su parte, Washington, por medio de licencias, está permitiendo que algunas empresas como Chevron y la francesa Maurel & Prom comercialicen petróleo venezolano. Pero la parte dura de las sanciones, tanto personales como financieras, siguen instaladas de manera férrea, por lo que es difícil pensar que la actual situación de distensión pueda mantenerse si se perpetúa el actual esquema sancionatorio.

Mientras tanto, la campaña electoral ya ha tomado las calles de Venezuela y los candidatos y líderes siguen proclamando su hipotético triunfo. Ni la oposición ni el Gobierno han “pateado la mesa” y participan en la precampaña con seguridad y sin episodios violentos. Pero el riesgo está presente: cada vez aumentan las probabilidades del triunfo de Donald Trump en la carrera presidencial estadounidense, quien podría, en un discurso de cualquier acto de campaña, divulgar una oferta electoral ofensiva contra Venezuela, lo que podría hacer saltar por los cielos el regreso electoral de la oposición para darle protagonismo a los discursos amenazantes de hacer tabula rasa con el chavismo, es decir, retornar a los postulados más radicales, insurreccionales y abstencionistas.

Fue el actual candidato quien dio luz verde a los funcionarios de su país para que aplicaran el esquema de sanciones, prepararan el golpe militar de abril de 2019 y afianzaran los discursos intimidatorios de las autoridades militares contra Venezuela, siempre para ganarse el apoyo del Partido Republicano en Florida. La actual administración del presidente Joe Biden, en medio de la crisis energética mundial, ha relajado la diatriba pública pero el diseño sancionatorio trumpista se mantiene casi intacto.

Así las cosas, la normalización política parece ser una tendencia que se acentúa en Venezuela, pero para mantener ese escenario parece imprescindible que Washington acelere algunas decisiones que permitan atenuar el asedio. El riesgo sigue latente.



Caricatura global